

EDITORIAL: POLÍTICAS E INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD: DINÁMICAS SIEMPRE ATRASADAS FRENTE AL CARÁCTER IRRUPTIVO DE LOS NUEVOS DESAFÍOS

Bertha García Gallegos*

Una mirada a la cronología de los últimos meses del año 2014 permite inferir que en el Ecuador las políticas de seguridad siguen en construcción. Cada reemplazo ministerial en defensa y/o seguridad es ocasión propicia para que el funcionario de turno anuncie las nuevas medidas que se tomarán. Pero en retrospectiva resultan ser casi idénticas a las que anunció quien deja el cargo. No contamos aún con un balance consolidado e integral de los avances en materia institucional.

En el Ecuador -vale admitir también en el resto de América Latina- los intentos por hacer frente a los nuevos retos de la Seguridad han ido muy por detrás de los acontecimientos, por sí más ricos en riesgos y amenazas que la capacidad de los gobiernos para visualizarlos. La inmensa diversidad y complejidad de los fenómenos incluidos en el campo, no pudieron ser advertidos en los finales de un siglo XX dominado por las lógicas de la guerra y las perspectivas milita-

res o militaristas. Solo desde sociedades individualizadas como las actuales, es posible advertir la diversidad de puntos de vista sobre la producción de las amenazas y la dinámica reflexiva con la que decurren en una infinita relación causal. Estas no son fácilmente percibidas por la inminencia de los acontecimientos, pero también porque los estados y tecnocracias civiles que reemplazaron a las cúpulas militares en la definición de las agendas, no tienen capacidades idóneas para hacerlo.

Ajenos durante demasiado tiempo de las preocupaciones de la política civil, los temas de defensa y seguridad, han sido asumidos por los políticos y sus tecnocracias tan solo como receptores de las antiguas prácticas, que resultan siempre atrasadas frente a las necesidades anticipatorias que las problemáticas de la seguridad requieren. Peor aun, en el transcurso, políticos y tecnócratas no han sido capaces de sostener relaciones democráticas, positivas y

productivas con las instituciones operadoras como las Fuerzas Armadas y la Policía, a las que por momentos parecen aplicar una mirada desdeñosa e incluso controversial. Sin reales fundamentos, porque nadie ha hecho un verdadero y profundo diagnóstico de estas instituciones, se ensayan planes de reforma sin preocuparse por presentar también un análisis de sus posibles consecuencias a mediano o largo plazo. Prevalece por lo tanto una mirada plana, perturbada por la falta de consecuencia en el seguimiento más profundo de los problemas sociales que están detrás.

Es así como las políticas de seguridad, faltas de una mínima capacidad de anticipación, quedan cortadas por las dinámicas tecnocráticas al acabarse el turno del funcionario a cargo; y el ciclo vuelve a empezar.

Como ilustración sirven algunas reflexiones sobre la lectura de nuestra Cronología de acontecimientos de estos últimos meses.

CONTENIDO

■ Editorial
Políticas e instituciones de la seguridad

Bertha García
pág. 1

■ La nueva crisis de derechos humanos en México

Arturo Alvarado
pág. 3

■ Marco jurídico y conceptual sobre la desaparición forzada de personas en Ecuador

César Banda
pág. 5

■ Reportaje:
"Vivos se los llevaron, vivos los queremos";
Desapariciones forzadas en México
Alejandro Montufar
pág. 9

■ Cronología:
Septiembre - noviembre 2014

pág. 12

Más allá, sobre todo de una lectura de las realidades actuales en el mundo, cuyos antecedentes son políticas o decisiones sobre las que no se supo medir las consecuencias. Muchas de las crueldades desatadas por las mafias criminales, la efervescencia de grupos fanáticos armados e inclusive la multiplicación de “lobos solitarios” que atentan indiscriminadamente contra las personas o multitudes inidentificadas, en casi todos los escenarios del planeta, proceden de las formas imprudentes en que se asumieron las luchas contra el terrorismo después del 11 de septiembre, que destruyeron una buena parte de los pilares democráticos de los estados occidentales.

En nuestro mismo continente, ciudadanos en México se levantan contra una década de violencia desatada en la lucha del Estado contra el crimen organizado. El caso de los 43 de Ayotzinapa ha sido la gota que derramó el vaso. No es el episodio más grave, porque los ha habido de mayor envergadura a lo largo de los últimos 10 años, pero sí es el que por fin ha despertado la conciencia social y exige el fin de la impunidad. El caso representa la enormidad del entresijo entre poderes locales, estatales, federales en disputa por territorios y prebendas, amalgamados por los rituales y los simbolismos del mundo de la droga. Guerreros Unidos no es un gran cartel, sino un grupúsculo de sicarios surgidos de las atrocidades permitidas por la corrupción de militares, policías, jueces, funcionarios políticos de

diversa escala. Producción constante de bandas criminales dentro del mercado y la división de trabajo propiciada por los carteles. No ha dejado de faltar la presencia de comuneros armados como guardias comunitarios a quienes ningún poder institucional puede controlar.

El presidente Calderón lanzó una ofensiva contra el crimen organizado el 11 de diciembre de 2006 al asumir la presidencia. Su sexenio fue duramente criticado por emplear al ejército en tareas de seguridad interior, las que deberían recaer en la Policía. Su legado dejó un país al borde de la ingobernabilidad, y en muchos estados el poder del narcotráfico superó al de las autoridades como es el caso de los estados de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán. Según sus críticos, no le fue posible tener claridad en las reformas que debía realizar para tener a corto plazo una Policía Federal.

En el caso del Presidente Peña Nieto, también sus críticos –en este caso el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.– analizan que “la situación se ha agravado, pues mientras no se ha recuperado el control de un solo municipio, más demarcaciones han caído en manos de los grupos criminales y sus abusos contra la población se han tornado más graves, sobre todo en los estados de Michoacán y Guerrero, situación que ha derivado en la conformación de grupos de autodefensa, que son un nuevo agente de la violencia. “Hoy

hay en el país, al menos, 207 municipios en condición de ‘Estado fallido’. Allí los grupos criminales son un poder paralelo al Estado. Esos municipios representan el 8% del total y en los mismos habita el 13% de los mexicanos”. Esta misma fuente reflexiona que “en uno u otros casos, los gobiernos no pueden evadir el enfrentarse sea con el terrorismo global, sea contra el crimen organizado, u otros factores de violencia; el problema es cómo lo hacen, la irradiación de la violencia y el olvido de que los estados democráticos hasta en los últimos confines, deben proteger la división de poderes y el respeto a los derechos humanos.

En este número del Boletín se ofrecen distintas perspectivas del fenómeno en México, lo sucedido en los últimos meses y algunas de sus raíces y causales. Una reflexión sobre el significado jurídico de fenómeno de la “desaparición forzada” elemento central en los sucesos de México nos alerta contra este flagelo que representa la ruptura más oprobiosa del tejido social ya que afecta a las personas en sus más sensibles relaciones humanas al separar súbitamente las vidas de padres, hijos, hermanos, compañeros.

• Socióloga. Profesora principal de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Directora del Programa Democracia, Seguridad y Defensa, PUCE

LA NUEVA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

Arturo Alvarado Mendoza*

Frente a los homicidios y la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala Guerrero, ocurridas en septiembre de 2014 han surgido muchas preocupaciones intelectuales de carácter diverso. En una conversación entre colegas, una profesora nos comentó que la situación de México era peor que la de Argentina durante la dictadura militar de los años setenta. Sorprendido por la mención quise argumentar algunas diferencias, entre ellas el que hasta ahora no hay evidencia de que estos homicidios y la desaparición pudieran ser parte de una estrategia política de crímenes masivos desde las esferas del poder público y con la colaboración y uso de todo el aparato represivo del Estado. En ese período las autoridades del estado organizaban la búsqueda, persecución detención tortura, asesinato y desaparición de un grupo específico de personas, de la oposición. Sin embargo, la mención abre una puerta de obligada reflexión sobre la profundidad de la crisis de derechos humanos que vivimos hoy día, frente, paradójicamente, a los cambios reseñados en este trabajo previamente. Ciertamente es que el crimen contra los estudiantes fue ordenado por autoridades políticas (locales), es un crimen con contenido político, pero cabe preguntarse ¿es un crimen de estado? ¿Acaso este proceso es irreversible? ¿Por qué México no ha sido declarado un país donde las crisis humanitarias son recurrentes? ¿Por qué los representantes del Estado mexicano violan las leyes que ellos mismos crearon? Y ¿cómo se ex-

plica el doble juego de negación/culpación al otro que realizan miembros distinguidos de la clase política y partidaria mexicana?

Como consecuencia de la crisis, el 30 de octubre de 2014 el gobierno de México solicitaría la "intervención" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para resolver/enfrentar/solicitar asistencia, para resolver lo que en la opinión de muchas organizaciones civiles es una crisis de los derechos humanos en el país. Ante esta situación es necesaria una reflexión adicional sobre este tema. Hay varias cuestiones que enunciar y procurar obtener algunas respuestas. Posteriormente, el Presidente Peña Nieto llamó a crear un nuevo "Pacto" por la seguridad en medio de esta crisis y del descrédito de buena parte de los partidos políticos y de la clase política.

Pero, retomando el argumento sobre la crisis humanitaria y la discusión sobre un crimen de estado, hay que tomar en cuenta que la persecución en Argentina y en otros países con dictaduras militares fue un período de represión orquestada desde el Estado contra un grupo político de personas opositoras al régimen, que luego incrementó la represión a otras personas. La policía y las fuerzas armadas eran parte del aparato de represión, de asesinatos y desapariciones masivas. Es necesario preguntarse si el comportamiento de los actores (del delito) mexicanos, los agresores, los testigos, los encubridores y hasta la

opinión pública (impávida ante un proceso criminal que no tiene aún solución ni verdad ni ley) podrían ser parte de una represión sistémica hacia un grupo social en Guerrero.

Este crimen cometido en Guerrero no es único, no está aislado por inhumano y grave que sea; es más bien producto de un proceso de aprendizaje, construcción de una actividad criminal desde fuera y desde dentro del Estado (y con actores del Estado, los políticos y los policías y una amplia red de complicidades). Quienes perpetraron el delito son criminales de Estado, algunos lo hicieron con propósitos claros, conociendo cómo se producen estas masacres, cómo procesar a las víctimas, esconder el delito; y ahora están sorprendidos porque no aplica el ocultamiento para ellos, que muchos otros crímenes producidos por otros o por ellos mismos, como antes, ahora no terminó olvidado, desconocido, ignorado por la justicia mexicana. Están sorprendidos porque no operó la impunidad de antaño; y observan también el oportunismo político de quienes los apoyaron para ascender al poder, el ocultamiento, la negación, la manipulación.

Ante este crimen debemos recordar otros actos violatorios a los derechos humanos, Aguas Blancas, Acteal, las masacres ocurridas en Coahuila en donde desapareció un centenar de personas sin averiguaciones; la crisis de los niños migrantes en este año; las masacres de migrantes en San Fernando Ta-

maulipas, hace poco más de tres años. Los miles de desaparecidos y las innumerables e incultables numerosas fosas que emergen frente a la sociedad y el Estado de personas sin nombre, sin reconocimiento, sin justicia. Los crímenes cometidos contra personas son conducidos en su gran mayoría por actores no estatales. Pero en cambio, el crimen de estado es un delito muy organizado, jerarquizado, sistematizado. Ahora bien, el criminal de Estado, ¿es distinto a otros delincuentes? Para decirlo en forma concreta ¿Son diferentes los represores y quienes cometieron crímenes contra la humanidad que estos criminales representantes políticos del estado mexicano, que probablemente cometieron este crimen contra estudiantes de Ayotzinapa? Como mencionaba Zafaroni, es difícil sostener una diferencia, pero es pertinente también integrar a la discusión el problema de los crímenes de estado de las dictaduras militares, los regímenes autoritarios y totalitarios. El nazismo fue castigado como perdedor; El estalinismo caló por la evolución de su propio régimen. Otros grupos criminales perdedores, derrotados, traicionados han terminado procesados. En Guatemala fue creada una comisión "contra la impunidad" con la participación de la ONU, que pretendió resolver los crímenes de varios diputados del PARLACEN, sin resultados hasta hoy, tanto por la obstrucción, la negación, la amenaza, la cancelación de las averiguaciones, por los asesinatos sistemáticos de personas formalmente involucradas en el crimen, para borrar las pistas, para negar los hechos, obstaculizarlos, por parte del propio Estado. Para ellos es un acto más de destrucción y de imposición

de su dominio, o del dominio de los jefes. Pero hay algunas diferencias dramáticas entre los criminales "moralistas" de las dictaduras o del nazismo y los actos de estos criminales. No hay moral en sus actos, son actores de una maquinaria de asesinatos masivos, de un proceso naturalizado de desapariciones bajo la protección política. Estos criminales destruyen las instituciones. No aceptan los límites legales impuestos al Estado. No tienen propósitos éticos, tal vez tampoco políticos (aunque en el caso de Iguala podría haber un móvil político); simplemente usan al estado para crear y aprovechar o sumar una maquinaria de destrucción humana. Se dirigen contra todo grupo de la sociedad que intenta oponerse a su poder omnímodo. No hay sistema de ideas como el nazismo, o los traidores de Stalin. En los asesinatos de Iguala, Gro., no hay una doctrina como la seguridad nacional de las dictaduras. Hay diferencias importantes en los crímenes contra la humanidad, porque los criminales no solo usan el poder del Estado, pero no pretender reconstruirlo, como los dictadores neonazis o como el estalinismo, más bien pretenden imponer un orden sin derechos; imponer el asesinato masivo como arma de castigo a cualquier atentado a su poder omnímodo (Zafaroni, 2013). Es un crimen de estado aunque las autoridades puedan negarlo (incluso, son responsables quienes lo niegan, no lo cometieron, ni lo aceptaron; es lo dramático de esta tragedia).

A la demanda de justicia y de encontrar vivos a los desaparecidos, han seguido tropiezos múltiples en la procuración de justicia y omisión de los actos necesarios de precaución, protec-

ción y averiguación que han complicado aún más el escenario. No es que las autoridades no estén realizando los actos legales, el problema es que la legalidad y las prácticas tradicionales de búsqueda de justicia están rebasadas frente a la tragedia y las demandas de las víctimas. ¿Qué legitimidad tendrán los actos de la autoridad ministerial y judicial? El problema del Procurador mexicano no será reparar el daño, juzgar a los responsables y encontrar a los desaparecidos; su problema es más profundo, que aun procurando justicia no pueda hacer justicia, que en la legalidad y verdad de sus actos no pueda encontrar la solución del crimen.

Además, entre la clase política ha ocurrido algo que Zafaroni refiere como dos formas de negación, la del hecho (por los criminales) y de responsabilidad (por su autodefensa; el caso de los alegatos injustificables del Partido Revolución Democrática (PRD) y otros líderes de izquierda es una muestra patética de esta negación). El criminal de Estado pertenece a la élite en el poder. Aprovecha esta circunstancia no sólo para la impunidad, sino para construir o consolidar una red de exterminio. Por eso cabe la pregunta ¿Pueden las instituciones del Estado aceptar esto, apoyarlo, procesarlo? ¿Cómo aceptar un desplazamiento de su responsabilidad? ¿Hacia las policías simplemente? ¿Hacia los actores intelectuales de la masacre? Todavía en el caso de Tlatlaya con la intervención militar se discute esto; pero en Ayotzinapa, es imposible sostener tal argumento.

¿Qué lo solucionará? Una comisión de la verdad suena ahora más política que justa. Un pacto

no resolverá el problema de fondo ni de forma. Pero ¿qué comisión podría encontrar la verdad y la justicia en estas masacres, en estos crímenes?, una comisión internacional tal vez, una de la Corte también. ¿Una corte internacional? ¿Cómo pensar esto? ¿Una comisión contra la impunidad como en PARLACEN? ¿Un juicio contra los dictadores y sus “empleados”? Un crimen de estado significa no sólo hablar de delincuentes (políticos) sino del sistema mismo. Requiere un tribunal especial que investigue, encuentre responsables y dicte medidas para resolver la crisis humanitaria.

En todo caso, estamos frente a una crisis de cuatro dimensiones. En primer lugar por las violaciones a derechos humanos de personas, de desaparecidos y de las víctimas; en segundo lugar por la deficiente procuración de justicia que falta al pro-

ceso debido; en tercer lugar porque ha quedado patente la incapacidad del Estado mexicano, de sus autoridades responsables, para brindar la protección y crear los mecanismos de solución a la crisis; es una crisis de todas las instituciones federales, estatales y municipales; y además de una crisis política por la responsabilidad, y su negación, de los líderes de partidos y de autoridades.

Tenemos un problema en nuestra democracia; actividades ilícitas de los gobernantes que crearon un sistema de impunidad del que ahora no pueden salir, y sus clientelas e intereses los involucran aún más. Hay un ambiente de corrupción entre la clase política con dinero y otros recursos ilegales en casi todos los actos y procesos de autoridad. Alberto Olvera sugiere desaparecer el fuero de los políticos; garantizar la auto-

mía política del sistema de justicia a través de fiscalías independientes dotadas de los recursos necesarios; darle autonomía efectiva a las comisiones de derechos humanos (ominosamente inoperantes); darle autonomía al Instituto Nacional Electoral, para que controle los actos de los partidos; y de una vez por todas, reformar las policías para que simplemente, no violen la ley ni los derechos humanos. Ese sería un gran cambio. A partir de esto una comisión o un tribunal de la Corte podrían investigar el involucramiento de representantes políticos en actividades ilícitas. Pero de nueva cuenta, la salida debe ser más república, más democracia, más derechos humanos.

•PhD en Ciencias Sociales con mención en Sociología. Director del Centro de Estudios Sociales del Colegio de México.

MARCO JURÍDICO Y CONCEPTUAL SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS EN ECUADOR

César Banda*

LA DESAPARICIÓN FORZADA COMO TIPO PENAL

La Comunidad Internacional, a través de la Organización de las Naciones Unidas, ha prestado especial atención a la práctica de la desaparición forzada de personas. En las Américas, la OEA (Organización de Estados Americanos) ha tratado también el tema a través de sus organismos especializados y con la expedición de convenios y tratados específicos para la materia.

En Ecuador, el artículo 84 del nuevo Código Orgánico Integral

Penal (COIP), tipifica y sanciona el delito de desaparición forzada de personas de la siguiente manera: *“La o el agente de Estado o quien actúe con su consentimiento, que por cualquier medio, someta a privación de libertad a una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero o destino de una persona, con lo cual se impida el ejercicio de garantías constitucionales o legales, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”*.¹

Este tipo penal tiene como sujeto activo al agente de Estado o a quien actúe con su consentimiento; es decir, que para la legislación ecuatoriana, siguiendo los parámetros internacionales, el sujeto activo del tipo penal “desaparición forzada de personas” solamente podrá ser un agente o funcionario público o quien actúe en su nombre. Se excluye de este tipo penal a todos los demás casos de desapariciones de personas, que en términos generales son la inmensa mayoría. En noviembre de 2014, el Ministro del Interior del Ecuador, José Serrano,

afirmó que en el país, de las personas desaparecidas o extraviadas, de enero a noviembre del 2014, el 89% fueron recuperadas en las primeras 6 horas desde que se presentó la denuncia. De las 3.607 personas reportadas como localizadas en este mismo periodo, 3.504 fueron localizadas con vida, lo que corresponde al 97,14% de estos casos. El 0,59% de las personas localizadas fueron encontradas sin vida, como resultado de homicidios. Estos casos de desaparición de personas han sido ya resueltos por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida y Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), con intervención de la Policía Nacional y la Fiscalía². La afirmación implicaría una gran eficacia de las agencias de seguridad del Estado ecuatoriano en solucionar el problema de la desaparición de personas, por lo que esta información merece ser verificada con mucha seriedad.

NORMATIVAS INTERNACIONALES

Por expreso reenvío del Art. 417 y 424 de la Constitución de la República del Ecuador, toda normativa internacional en materia de Derechos Humanos tiene rango de norma constitucional en el ordenamiento jurídico interno. Se incluyen no solo tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos firmados y ratificados por Ecuador, sino también, la jurisprudencia internacional. Es así como el **Art. II de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas** dice lo siguiente: “Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por perso-

nas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.³

En el **Art. IV de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de personas**, consta: “Los hechos constitutivos de la desaparición forzada de personas serán considerados delitos en cualquier Estado Parte. En consecuencia, cada Estado Parte adoptará las medidas para establecer su jurisdicción sobre la causa en los siguientes casos: a. Cuando la desaparición forzada de personas o cualesquiera de sus hechos constitutivos hayan sido cometidos en el ámbito de su jurisdicción; b. Cuando el imputado sea nacional de ese Estado; c. Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado. Todo Estado Parte tomará, además, las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre el delito descrito en la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre dentro de su territorio y no proceda a extraditarlo. Esta Convención no faculta a un Estado Parte para emprender en el territorio de otro Estado Parte el ejercicio de la jurisdicción ni el desempeño de las funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de la otra Parte por su legislación interna”.⁴

Art. V de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas. “La desaparición forzada de personas

no será considerada delito político para los efectos de extradición. La desaparición forzada se considerará incluida entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir el delito de desaparición forzada como susceptible de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro. Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado y reciba de otro Estado Parte con el que no tiene tratado una solicitud de extradición podrá considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición referente al delito de desaparición forzada. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán dicho delito como susceptible de extradición, con sujeción a las condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido. La extradición estará sujeta a las disposiciones previstas en la constitución y demás leyes del Estado requerido”.⁵

ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y LA ECUATORIANA

La primera diferencia importante entre el artículo 84 del COIP del Ecuador y las Cartas Interamericanas antes mencionadas, es que el COIP habla de una persona como sujeto pasivo del delito de desaparición forzada de personas; mientras las Cartas Interamericanas hablan de una o más personas. Esta diferencia, que podría ser minimizada si es tratada con ligereza, excluiría del tipo penal de desaparición forzada de personas a grupos humanos, tales como etnias, grupos políticos o cualquier

conglomerado social. La segunda diferencia importante es que en el COIP de Ecuador, al tratar del sujeto activo que es el agente de Estado o quien actúe con su consentimiento, no se usa el término “**aquiescencia del Estado**”; el cual implica el total conocimiento y voluntad del Estado en el acto de la desaparición forzada de personas.

Se debe destacar el pronunciamiento realizado en las varias declaraciones y cartas internacionales en materia de desaparición forzada de personas, que incluyen normas especiales para el tratamiento no solo de las víctimas de desaparición forzada, sino también a favor de sus familias. Estas cartas, entre sus cláusulas, tratan también temas de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes que las víctimas de este delito pudieron sufrir a manos de sus captores, incluida la muerte en cautiverio. Se establecen además parámetros normativos, administrativos y de otras índoles para erradicar del territorio de los Estados este grave delito; y, prevenir mediante políticas de Estado y gobierno la desaparición forzada de personas.

Es así como la comunidad internacional a través de cartas y convenios específicos trata de prevenir y erradicar la desaparición forzada de personas, que afecta a todas las naciones del mundo. Se conmina a los Estados de la comunidad internacional para que introduzcan en sus normativas internas las conductas descritas en los tratados y convenios; y, además sancionen con penas rigurosas el delito de desaparición forzada de personas.

Las principales normas que están descritas en las cartas regionales sobre esta materia y están vigentes y aplicables en el continente americano son:

Art. 1 de la Declaración sobre la protección de todas las personas, contra la desaparición de todas las personas. “1. Todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana. Es condenado como una negación de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y como una violación grave manifiesta de los derechos humanos y de las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales pertinentes. 2. Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro”.⁶

Art. 2 de la Declaración sobre la protección de todas las personas, contra la desaparición de todas las personas. “1. Ningún Estado cometerá, autorizará ni tolerará las desapariciones forzadas. 2. Los Estados actuarán a nivel nacional, regional y en cooperación con las Naciones Unidas para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzadas”.⁷

Art. 3 de la Declaración sobre la protección de todas las personas, contra la desaparición de todas las personas. “Los Estados tomarán medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras medidas eficaces para prevenir o erradicar los actos de desapariciones forzadas en cualquier territorio sometido a su jurisdicción”.⁸

Art. 4 de la Declaración sobre la protección de todas las personas, contra la desaparición de todas las personas. “1. Todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con el derecho penal, delito pasible de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad. 2. Las legislaciones nacionales podrán establecer circunstancias atenuantes para quienes, habiendo participado en actos que constituyan una desaparición forzada, contribuyan a la reaparición con vida de la víctima o den voluntariamente informaciones que permitan esclarecer casos de desaparición forzada”.⁹

Art. 5 de la Declaración sobre la protección de todas las personas, contra la desaparición de todas las personas. “Además de las sanciones penales aplicables, las desapariciones forzadas deberán comprometer la responsabilidad civil de sus autores y la responsabilidad civil del Estado o de las autoridades del Estado que hayan organizado, consentido o tolerado tales desapariciones, sin perjuicio de la responsabilidad internacional de ese Estado conforme a los principios del derecho internacional”.¹⁰

Art. 6 de la Declaración sobre la protección de todas las personas, contra la desaparición de todas las personas.

"1. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea esta civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar una desaparición forzada. Toda persona que reciba tal orden o tal instrucción tiene el derecho y el deber de no obedecerla. 2. Los Estados velarán por que se prohíban las órdenes o instrucciones que dispongan, autoricen o alienten las desapariciones forzadas. 3. En la formación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley se debe hacer hincapié en las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo".¹¹

Art. 7 de la Declaración sobre la protección de todas las personas, contra la desaparición de todas las personas.

"Ninguna circunstancia, cualquiera que sea, ya se trate de amenaza de guerra, estado de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otro estado de excepción, puede ser invocada para justificar las desapariciones forzadas".¹²

COMENTARIOS FINALES

No se puede dejar de comentar lo sucedido en el estado mexicano de Guerrero, en septiembre de 2014, la noticia recogía lo siguiente: "**La desaparición forzada en Iguala de 2014 fue una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en el que estuvieron involucrados policías municipales del Municipio de Iguala de la Independencia, en el estado mexicano de Guerrero y estudiantes de la Escuela (mejor conocida**

como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa), periodistas y civiles. Los hechos dejaron un saldo de al menos seis personas fallecidas, veintisiete heridos y la desaparición de 43 estudiantes de esa escuela normal rural"".¹³

Mi opinión al respecto es que en el Estado de México se han dado las condiciones políticas y sociales para que suceda este tipo de crímenes atroces. La democracia mexicana, esta extremadamente debilitada. El partido político único que triunfó en la revolución, perdió el norte hace mucho tiempo; la corrupción tiene índices alarmantes; la inseguridad y la criminalidad violenta son cotidianas; el ciudadano mexicano vive en permanente zozobra y peligro. El Estado de México se ve impotente para luchar contra las mafias y los carteles de la droga. Los organismos públicos y de seguridad del Estado, Policía y Fuerzas Armadas están infiltrados por el narcotráfico y las mafias. Se puede considerar como una alternativa para este Estado fallido de México, una nueva revolución que cambie todas las estructuras de poder del Estado y sienta las bases de una nueva democracia participativa y real. Una revolución similar a la de Emiliano Zapata, los hermanos Flores Magón, Francisco Ignacio Madero y Francisco Villa¹⁴; que a comienzos del siglo XX trataron de moldear un Estado moderno y más justo.

No debemos perder de vista a un fenómeno social tan grave como la desaparición forzada de personas, que en el Ecuador y en el mundo han causado tanta conmoción. Casos ecuatorianos como el de los hermanos Restrepo y del escritor Gustavo Garzón, no pueden

quedar en la impunidad. Las sentencias condenatorias y las sanciones de Cortes Internacionales, resultarían insuficientes si no van de la mano con la reparación efectiva para las víctimas y familiares. El perdón y olvido no deben ser admitidos para este crimen de lesa humanidad.

* Abogado ecuatoriano, doctor en Jurisprudencia, especialista en Derechos Humanos.

1. Art. 84 COIP Código Orgánico Integral Penal; derogado el 10 de agosto de 2014.
2. 2014: Efectividad de Dinased en resolución semanal de casos de homicidios se incrementó 300%. <http://www.policiaecuador.gob.ec/23114/>
3. Art. II de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas
4. Art. IV de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas.
5. Art. V de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas.
6. Art. 1 de la Declaración sobre la protección de todas las personas, contra la desaparición de personas.
7. Art. 2 de la Declaración sobre la protección de todas las personas, contra la desaparición de personas.
8. Art. 3 de la Declaración sobre la protección de todas las personas, contra la desaparición de personas.
9. Art. 4 de la Declaración sobre la protección de todas las personas, contra la desaparición de personas.
10. Art. 5 de la Declaración sobre la protección de todas las personas, contra la desaparición de personas.
11. Art. 6 de la Declaración sobre la protección de todas las personas, contra la desaparición de personas.
12. Art. 7 de la Declaración sobre la protección de todas las personas, contra la desaparición de personas.
13. http://es.wikipedia.org/wiki/Desaparici%C3%B3n_forzada_en_Iguala_de_2014.
14. Cultura Colectiva Los personajes de la Revolución Mexicana, noviembre 16, 2014 <http://culturacolectiva.com/los-personajes-de-la-revolucion-mexicana/>.

REPORTAJE:**"VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS":
DESAPARICIONES FORZADAS EN MÉXICO**

Alejandro Montufar *

Los hechos

El pasado 26 de septiembre, cerca de las 21:00 horas (local), decenas de estudiantes de la escuela normalista de Ayotzi- napa (estado de Guerrero) lle- garon a Iguala, según versiones de las autoridades, manipula- dos por el cartel Los Rojos, para boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pi- neda, presidenta del DIF muni- cipal quien controla dicha localidad. Uno de los sobrevi- vientes de la emboscada poli- cíaica perpetrada hace un mes, niega la versión oficial y aclara que el verdadero obje- tivo de los normalistas, para acudir a Iguala, era capturar tres autobuses de pasajeros para llevar estudiantes hacia los poblados donde realizarían sus prácticas. También se los emplearía para llevar una dele- gación estudiantil a la Ciudad de México, el 2 de octubre, y participar en la marcha con- memorativa de la Matanza de Tlatelolco (1968).

Las actividades acontecidas el 26 de septiembre de 2014 co- rresponden a las carteras de "Lucha y transporte", como los normalistas nombran a cada área. Un grupo de 120 jóvenes que no superan los 25 años, en su mayoría de primer grado de la escuela normal, salió en dos autobuses Estrella de Oro que ya llevaban tres días secuestra- dos. Después, tomarían cuatro autobuses más de la terminal

de Iguala y regresarían al cam- pus, esto de acuerdo con lo que dijeron algunos sobrevi- vientes.

Los estudiantes fueron ataca- dos por policías municipales de Iguala. En el hecho murieron 6 personas, entre ellas 3 normalis- tas, 25 resultaron heridas y 43 fueron detenidas en el cuartel municipal. Con ayuda de agentes de Cocula, a éstos los trasladaron a Pueblo Viejo, donde presuntamente los en- tregaron al grupo delictivo Guerreros Unidos, una escisión del cartel Beltrán Leyva. A partir de ese momento nada se sabe de los normalistas.

Los testimonios de los estudian- tes entrevistados por VICE News coinciden en que al menos 30 estudiantes fueron secuestra- dos en las patrullas policiales con números 017, 018, 020, 022, 028 y 302, y que hicieron por lo menos tres viajes para llevarse al mayor número de normalis- tas. El segundo ataque a los normalistas —que ya estaban heridos— provenía de camio- netas que derraparon sobre la misma avenida en sentido con- trario a la circulación, de acuerdo con algunos testigos, los hombres que dispararon du- rante el segundo ataque eran civiles armados.

Entre las víctimas fatales estaba el cuerpo de Julio César Mon- dragón que fue encontrado la mañana siguiente sin ojos ni piel

en el rostro, lo cual evidencia la brutalidad con la que fueron atacados los normalistas. Su cadáver apareció a tres calles del lugar donde los policías se llevaron a los estudiantes.

El 28 de septiembre de 2014 la Procuraduría de Guerrero arrestó a 22 policías de Iguala por su presunta responsabilidad en los ataques, Iñaky Blanco Cabrera, titular de la Procura- duría General de Justicia (PGJ) de Guerrero, confirmó ese día que los hechos de violencia en Iguala se debieron a un uso ex- cesivo de la fuerza por parte de 22 efectivos policiacos, mien- tras que el 30 de septiembre de 2014 el gobernador de Gue- rrero, Ángel Aguirre, llama al al- calde de Iguala, José Luis Abarca, a demostrar que no tiene nada que ver con los he- chos. El político pide licencia por 30 días y se fuga.

¿Qué son las escuelas norma- listas?

Las Escuelas Normales Rurales originalmente planteadas co- mo Escuelas Rurales Regionales o Centrales Agrícolas, forman parte del principal proyecto de reforma educativa propiciado por los gobiernos posrevolucio- narios en México. Sus objetivos han sido la socialización de la educación en el ámbito rural mexicano, así como propiciar la concientización y participa- ción social de quienes se for- man en estos planteles. Desde

sus inicios adoptaron el esquema de la defensa de la educación pública como un derecho popular y sobre todo como un derecho de los más pobres. Dentro del proyecto nacionalista del presidente Lázaro Cárdenas, un reformador de la revolución mexicana, las normalistas debían atender a las necesidades educativas de las comunidades rurales (principalmente dotar de maestros campesinos para la enseñanza primaria), que pudieran educar a los hijos de los campesinos.

Desde su primera instalación entre 1934-1940 por Lázaro Cárdenas, quien reivindicó a los campesinos e indígenas mediante el impulso de una reforma agraria, las Escuelas Normales Rurales no fueron ajenas a las condiciones sociales y económicas particulares de cada lugar, y por ello los planes y programas de estudio fueron adecuados a las realidades locales. El principal requisito para ingresar a estudiar en una normal rural ha sido el no contar con los recursos suficientes como para aspirar a una educación en las universidades oficiales o estatales. El maestro rural también ha desempeñado otros papeles además del educativo, ha sido entre otras cosas, agricultor, médico y amigo del pueblo.

Las normales rurales fortalecieron su carácter politizador estimulando el proceso de transformación social a través de la enseñanza, adoptando el modelo de educación socialista propuesto por el gobierno de Cárdenas con la reforma al artículo 3 constitucional en el año de 1934. Dicha reforma trajo consigo la inconformidad de los sectores conservadores

mexicanos ya que replantea firmemente la exclusión de la religión en la educación, cuestión muy arraigada en algunas zonas rurales; generando desconfianza hacia el proyecto de educación campesina. Con el tiempo los grupos de poder, las han estigmatizado llamándolas "escuelas del diablo" derivando incluso en ataques y atentados contra la vida de los maestros rurales.

Es pertinente señalar que en los inicios de las normales rurales (décadas de los 30 y los 40), muchos aspectos de la realidad nacional aún se encontraban en reconstrucción tras la revolución mexicana. La intención de cada gobierno era insertar a México dentro de los proyectos "modernizadores". El carácter de la educación que ofrecería el Estado era un aspecto crucial aun en definición. La decisión oscilaba entre las políticas conservadoras que visualizaban a la educación como un medio disciplinario y de control social, o una postura intelectual que concebía a la escuela como un espacio propicio para despertar la conciencia popular.

Crimen organizado e inseguridad en México

Desde el gobierno de Felipe Calderón, México se ha visto envuelto en problemas relacionados con la violencia, debido a las medidas adoptadas para el combate contra el crimen organizado, ya que su estrategia estuvo basada en la militarización, movilizando a las Fuerzas Armadas para luchar contra los carteles y es durante la aplicación de esta política de seguridad que en México se produjo entre 45000 y 60000 muertes re-

lacionadas con el crimen organizado.

El problema con el crimen organizado en México ya era visible en el mandato de Vicente Fox (2000-2006). En este periodo las autoridades mexicanas arrestan a un total de 15 líderes de carteles y 75 de sus lugartenientes, ya que la política de seguridad del gobierno en esta época, estuvo dirigida a la detención de los líderes de los carteles. Pero la militarización como política de seguridad se hizo presente desde el mandato de Ernesto Zedillo (1994-2000), del PRI, antes del gobierno de Calderón cuando esta política se hizo prioritaria.

Según las palabras de Felipe Calderón, la estrategia de seguridad adoptada, buscaba una rápida restitución de la autoridad del Estado en aquellas zonas donde peligraba. A esta estrategia se la ha denominado la "mexicanización" de la seguridad, referida específicamente a la lucha contra el crimen organizado, única causa que provoca la movilización de las Fuerzas Armadas, sobre un problema que llega a considerarse no solo como de seguridad pública sino también de seguridad nacional, que amenaza directamente al Estado.

En el mandato de Calderón (2006-2012) se desarrollan operaciones militares en 16 estados, 8 de los cuales con un millar o más de efectivos. A pesar de las medidas, la cifra de homicidios en México ha ido en ascenso, agravada por las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas desplegadas. Mientras que el panorama actual en el gobierno del presi-

dente Peña Nieto se presenta no menos preocupante. Las movilizaciones diarias en todos los frentes demuestran el hartazgo ciudadano. Las organizaciones de derechos humanos consideran que, frente a la magnitud de la crisis de la desaparición de los 43 normalistas, el Presidente debió haber reco-

nocido su importancia y anunciar medidas inmediatas y emergentes para garantizar que no haya impunidad y se aplique la justicia con todo rigor. El centro de derechos humanos Prodh lamenta que el discurso del presidente no haya estado centrado en erradicar la desaparición forzada de per-

sonas. Tampoco aplaude la decisión de crear un sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas y de información genética, porque dicen que no es la primera vez que se anuncian planes similares.

Organización de Naciones Unidas:

LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA DESAPARICIONES FORZADAS

Esta Convención es el primer tratado vinculante a nivel mundial que define la desaparición forzada como una violación de los derechos humanos y que la prohíbe. La desaparición forzada se define como el secuestro o la detención de una persona por las autoridades de un Estado, seguida de la negativa de las autoridades a revelar el paradero de esa persona o a dar información sobre lo que le ha sucedido. Para luchar contra las desapariciones forzadas, la Convención prevé cuatro aspectos.

- **Combatir la impunidad** - La Convención impone a los Estados la obligación de hacer comparecer ante la justicia a los responsables de desapariciones forzadas. No se trata sólo de personas que hayan cometido ese crimen en su propio territorio, sino también de casos en que la presunta infracción se cometió en otras jurisdicciones. En estos casos, los estados deben enjuiciar o extraditar al presunto criminal, de tal modo que nadie pueda escapar a la justicia.
- **Prevención** - La Convención prevé varios procedimientos de salvaguardia para evitar las desapariciones: los lugares de detención donde se mantiene a las personas privadas de libertad deben ser oficiales, se deben registrar los datos, así
- **Derechos de las víctimas** - Esta es la primera Convención que reconoce que las víctimas de la desaparición forzada no son sólo los desaparecidos, sino también sus familiares. Reconoce el derecho de los familiares a saber lo que ha ocurrido con la persona desaparecida y a recibir una reparación por el daño que se les ha causado.
- **Aplicación** - La Convención establece un comité internacional formado por diez expertos independientes para velar por su aplicación. Esos expertos revisarán los informes que hagan los Estados y también pueden recibir quejas de particulares. La Convención prevé, asimismo, un procedimiento de *habeas corpus*, por medio del cual los familiares y otras personas interesadas que temen que una persona ha sido objeto de desaparición forzada pueden dirigirse directamente al comité internacional y, si la queja es justificada, el comité solicitará al Estado que busque y ubique a la persona desaparecida.

BIBLIOGRAFÍA

Amnistía Internacional, *Principales preocupaciones en derechos humanos*, Informe 2013, <https://www.es.amnesty.org/paises/mexico/principales-preocupaciones-de-derechos-humanos/>

Enrique Toussaint, *Los errores de Peña Nieto en Ayotzinapa*, <http://www.informador.com.mx/suplementos/2014/555966/6/los-errores-de-pena-nieto-en-ayotzinapa.htm>

Fernando del Rincón, Rafael Romo, Claudia Domínguez, Kay Guerrero, Tatiana Arias, Krupskaja Alís, Rey Rodríguez y CNNMéxico.com, *41 días después ¿Qué pasó con los 43 estudiantes?*, 06 de noviembre del 2014,

<http://cnnespanol.cnn.com/2014/11/06/41-dias-despues-que-paso-con-los-43-estudiantes/>

El Comienzo, *Escuela para pobres las normales rurales en México*, <http://periodicoelcomienzo.blogspot.com/2012/02/escuelas-para-pobres-las-normal-es.html>

Naciones Unidas, *Convención de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas*, 20 de diciembre del 2006, <https://www.icrc.org/spa/resources/documents/interview/convention-enforced-disappearance-interview-201206.htm>

Animal Político, *Cronología del caso Ayotzinapa: los 43 normalistas que aún no aparecen*, 07 de noviembre del 2014, [http://www.animalpolitico.com/2014/11/cronologia-](http://www.animalpolitico.com/2014/11/cronologia-del-caso-ayotzinapa-un-mes-de-la-desaparicion-de-43-estudiantes/)

<http://www.animalpolitico.com/2014/11/cronologia-del-caso-ayotzinapa-un-mes-de-la-desaparicion-de-43-estudiantes/>

Melissa Del Pozo, *Normalistas sobrevivientes describen la noche del ataque por parte de la policía en Iguala*, 14 de noviembre del 2014, http://www.vice.com/es_mx/read/normalistas-sobrevivientes-describen-la-noche-del-ataque-por-parte-de-la-policia-en-iguala

COOK Colleen, *Mexico's Drug Cartels*, Congressional Research Service, febrero de 2008, 3, disponible en <http://www.hsdl.org/?abstract&did=485233>.

Concha Moreno, *Las diez medidas de Peña Nieto para pacificar México*, 07 de diciembre del 2014, <http://periodistas-es.com/las-diez-medidas-de-pena-nieto-para-pacificar-mexico-44969>

CRONOLOGÍA SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE DEL 2014

SEGURIDAD CIUDADANA

Nuevas estrategias contra el microtráfico. En los operativos antidrogas desplegados por los agentes antinarcóuticos de la Policía Nacional, 413,60 kilos de cocaína, 513,8 de marihuana y 108 gramos de heroína han sido decomisadas entre enero y agosto de 2014. Los agentes han operado en las zonas periféricas y en la ciudad de Quito. Como parte de las investigaciones, 774 personas han sido detenidas mientras vendían los narcóticos, según el Ministerio del Interior. Además, 119 adolescentes fueron aislados por agentes de la Dinapen, tratados, asistidos, entregados a sus padres y designados a trabajos de regeneración y aprovechamiento del tiempo, incluso fuera de su ciudad o cantón de residencia. *Diario El Comercio*. 31/08/2014.

Pandillas juveniles y redes del narcotráfico. La Dirección de Acción Social y Educación Roberto Ver-nimmen realizó un "ejercicio de observación" en varias troncales de la Metrovía en la ciudad de Guayaquil y y detectó que pandillas vendían drogas en las estaciones. La Policía aún no cuenta con investigaciones que sustenten la vinculación entre pandillas y redes. En la ciudad de Guayaquil, según estimaciones del Municipio, hay unos 20 mil jóvenes inmersos en organizaciones urbanas legales, como Latin King, Ñetas, y también pandillas en colegios. Omar Paredes, jefe de la unidad Antinarcóuticos de la provincia de Guayas, también expresa que hay "disidentes" en las agrupaciones y que es probable que sean estos quienes estén armando nuevas gangas o pandillas, además de mencionar la gravedad de los problemas intrafamiliares. La edad en que se empieza a reclutar a menores para que integren grupos o pandillas es de 10 años, dicen expertos. *Diario El Universo*. 01/09/2014.

Detección de sustancias ilícitas en muestras de cabello por medio del Espectrómetro. Con la muestra de un cabello se conocerá si una per-

sona consume alguna sustancia ilícita. Esto será posible con la utilización del espectrómetro, que será instalado únicamente en el Centro de Investigaciones y Ciencias Forenses de la ciudad de Cuenca. La obra está avanzada en el 95% y ya se instalaron los equipos en todos los laboratorios del Centro Forense que será entregado a la Universidad de Cuenca. Además, contará con salas de muestras, rayos X, autopsias, ecografías e imagenología.. El espectrómetro también determinará si existe presencia de alcohol adulterado y otras sustancias tras el análisis de sangre. *Diario El Telégrafo*. 06/09/2014.

Medidas contra el hacinamiento carcelario. Un grupo de 662 mujeres privadas de libertad en la cárcel de El Inca, en la ciudad de Quito, fueron trasladadas al Centro de Rehabilitación Social de la provincia de Cotopaxi. La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, informa que allí les esperan "espacios adecuados que facilitan la rehabilitación y garantizan la seguridad". De los miembros de la Policía Nacional que participaron en el operativo, 600 eran mujeres, señaló Zúñiga. En un comunicado, el Comité de Familiares y amigos de las Personas Privadas de Libertad aseguró: "Ni las ni los familiares o las organizaciones como el Comité han recibido ningún tipo de información sobre el traslado, lo cual atenta contra sus derechos de recibir información". En el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Femenino El Inca, en Quito, aún continúan 60 mujeres privadas de la libertad, entre embarazadas, madres con niños de hasta 3 años, internas con urgencias de salud y quienes tienen pendientes audiencias en los juzgados de la capital. Ellas son el remanente de las 662 internas que se encontraban en esta dependencia. *Diario El Universo*. 31/08/2014.

Se discute en la Asamblea Nacional la creación de la Policía Civil para el sector público.

La creación de la Policía Civil Ar-

mada de Protección para el sector público, es uno de los puntos polémicos dentro del análisis de los libros del proyecto de Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que trata la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. La creación de la Policía Civil, que consta en el libro III del Código, se encargaría de proteger a los funcionarios de alto rango del Gobierno, que tendría una estructura similar a la Policía Nacional. Es precisamente en este punto que no hay acuerdo. El asambleísta Antonio Posso consideró que los funcionarios de alto nivel pueden contar con personal especializado para su protección, pero sin conformar una estructura que tenga mayor jerarquía a la Policía. *Diario El Telégrafo*. 21/09/2014.

Fueron sustraídos mas de 2 millones de dólares en 2014 por delitos cibernéticos. La denuncia de un ciudadano, permitió a la Policía capturar a 2 sospechosos que intentaron llevarse el dinero a través de una transferencia a una entidad bancaria de Perú. Hasta julio de 2014 el perjuicio ocasionado por delitos digitales por ingreso a cuentas de la banca virtual o robos en cajeros automáticos ATM, sumó un total de \$ 2'076.792.20 mediante diferentes modalidades para obtener claves de acceso a las cuentas de los usuarios de los bancos. El coronel Nicolay Zapata, de la Unidad de Crímenes Cibernéticos, indicó que existen organizaciones delictivas bien estructuradas compuestas por profesionales en informática y electrónica. Por este motivo, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica en la sección tercera a los delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas e información y comunicación que castiga con una pena de 3 a 5 años. *Diario El Telégrafo*. 13/10/2014.

Bienes e inmuebles incautados al narcotráfico se destinan a proyectos productivos alternativos.

El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) maneja ocho proyectos de desarrollo alternativo y preventivo a escala nacional, para reducir el riesgo de que poblaciones vulnerables se involucren en actividades ilícitas de cultivo, producción, acopio y tráfico de estupefacientes. Según Esteban Yépez, director de Desarrollo Alternativo y Preventivo, proyectos se desarrollan en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Sucumbíos, Chimborazo, Guayas y Santa Elena, y más de 4 700 familias se benefician. La intención es intervenir en lugares en donde la población es vulnerable a ser tentada por las mafias delictivas. En comunidades remotas de la provincia de Esmeraldas se aplicó un programa de producción de cacao fino de aroma para generar empleo para los jóvenes. Según Yépez, los productores reciben la ayuda del Estado para comercializar sus productos. Los productores de cacao de la Amazonía negocian directamente con las fábricas de chocolate para evitar intermediarios. Se ha detectado que ante la falta de empleo, comuneros de zonas vulnerables han alquilado sus terrenos a personas que los utilizan para actividades ilícitas. *Diario El Comercio*. 26/10/2014.

En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador se realizaron Conferencias sobre el uso de las drogas y alternativas terapéuticas.

Alrededor de 20 ponencias discuten expertos y académicos en el 'I Tanque de Pensamiento' sobre usos de drogas. La jornada fue organizada por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep). José Arauz, director de Bienestar Estudiantil de la PUCE, ofreció la bienvenida a los conferencistas y asistentes. Eduardo Paredes, director nacional de Control de la demanda del Consep, afirmó que la finalidad es establecer espacios de reflexión y análisis para que los estudiantes acudan y participen en las charlas. Rodrigo Vélez, secreta-

rio ejecutivo del Consep, expuso en la mañana sobre: 'Mercados de drogas regulados y política prohibicionista'. Explicó que la política de prohibición que se ejecuta desde 1961 no brinda resultados satisfactorios en el tema de drogas en la región, por lo que cuestionó el costo tanto económico como social de mantener esas decisiones. Ejecutar un modelo preventivo antes que represivo es la manera de abordar el fenómeno de manera distinta. *Diario El Telégrafo*. 27/10/2014.

MILITARES Y MINISTERIO DE DEFENSA

En el Ministerio de Defensa se crea comando contra los ataques cibernéticos.

Los "ataques cibernéticos" afectan a plantas hidroeléctricas, petroleras, redes de telecomunicaciones, centrales telefónicas, sistemas: financieros, hospitalarios y de defensa. Ingenieros informáticos y analistas coinciden que los ataques se dan por medio de virus y software maliciosos con los que se vulneran claves y contraseñas de sitios web estratégicos de los gobiernos. Para afrontar estos problemas, el gobierno ha adoptado estrategias y políticas de ciberdefensa. El Ministerio de Defensa anunció la creación del Comando de Ciberfensa, que tendrá un presupuesto de USD 8 millones. Operará en la Brigada Pichincha a partir del 2015 y dependerá únicamente de esa Cartera de Estado. "Se capacitará a talento humano para que actúe en seguridad pero no en el espionaje, ni en el ataque", precisó el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., general Luis Garzón. Marco Jarrín, asesor de la Secretaría de Inteligencia, explica que pese a que se han registrado más de 600 desfiguraciones a sitios web gubernamentales desde el 2011, hasta el momento no ha existido coordinación para afrontar el problema. *Diario El Comercio*. 15/09/2014.

El ingreso a las Fuerzas Armadas del Ecuador se vuelve más exigente.

42 000 uniformados integran actualmente las Fuerzas Armadas (FFAA). Esa cantidad de militares se reducirá a 34 500 hasta el 2025, lo cual representan un 18%. Así lo dis-

puso el Ministerio de Defensa como parte de las reformas planteadas al interior de la institución uniformada. Para esto, el Ministerio de Defensa redujo los cupos de ingreso a las escuelas de formación tanto de oficiales como de tropa. De hecho, 630 aspirantes a soldados ingresan a la Escuela de Formación 'Vencedores del Cenepa' (Esforse). Antes, el cupo era de 1 200 jóvenes. La Ministra María Fernanda Espinosa, presentó el "nuevo diseño operacional" de las Fuerzas Armadas, que incluye la reubicación de puntos militares, la reducción progresiva del pie de fuerza y la adquisición de equipos con el fin de "optimizar" recursos. Fuerza Terrestre tiene 23 fuertes y se eliminarán siete; las unidades militares, pasarán de 271 a 235; la base aérea de Taura albergará a la Infantería Aérea y al ala 22 de helicópteros de la FAE. Según la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Finanzas, el Gobierno invirtió USD 7,14 millones en armamento para el Ejército en el 2013, y al menos USD 29,58 millones para helicópteros multipropósito. *Diario El Comercio*. 31/08/2014.

Ministro de Defensa asegura que Ecuador examina ofertas para comprar radares de vigilancia.

Fernando Cordero, nuevo Ministro de Defensa, aseguró que el país examina nuevas ofertas para comprar radares, que sirvan en la vigilancia aérea del territorio nacional. En 2009, el país firmó un contrato con la empresa china CETC, para adquirir cuatro radares por un monto de USD 60 millones. También informó que "entrará en funcionamiento un comando estratégico de coordinación entre la Policía y las Fuerzas Armadas, para hacer frente a la delincuencia. Habrá un trabajo articulado de tareas entre las dos entidades y la Secretaría de Inteligencia". Sobre la situación al interior de los cuarteles, Cordero confirmó que "hay personas en el ámbito del servicio pasivo haciendo circular rumores y pasquines". *Diario El Comercio*. 07/10/2014.

POLICÍA NACIONAL

Investigación por casos de drogas alcanza a más policías.

La detención de policías supuestamente involucrados en casos de drogas encendió nuevas alertas en esta institución. El 17 de octubre de 2014, en el aeropuerto de la ciudad de Quito, fueron detenidos cinco uniformados en servicio activo, por facilitar el envío de sustancias ilícitas por narcotraficantes desde el Aeropuerto Mariscal Sucre, lugar de trabajo de los gendarmes. El 12 de septiembre de 2014 fueron aprensados cinco policías en servicio activo en la ciudad de Quito, entre los cuales se hallaban dos sargentos y dos cabos. Las investigaciones comenzaron el 16 de julio de 2013 y han dado evidencias de que ellos facilitaban el paso de personas que transportaban el alcaloide en el Aeropuerto Mariscal Sucre. Otro caso ocurrido el 26 de septiembre de 2014, culminó con el arresto de dos oficiales en servicio activo que brindaba seguridad a una organización criminal que pretendía camuflar droga dentro de un cargamento de pulpa de fruta. Por casos como estos, el Ministro del Interior, José Serrano, habla sobre la política de depuración aplicada desde el 2010. En un discurso emitido en la ceremonia de ascenso de generales de la Policía, Serrano afirmó que este año 600 policías han sido removidos de su cargo por fallas detectadas. *Diario El Comercio. 20/10/2014.*

Policías de menor rango encabezan la lista de suicidas en la institución.

En Ecuador, desde el 2010 hasta el 2014, ocurrieron 42 suicidios en la Policía Nacional, siendo uniformados con rango de cabo primero los que más bajas sumaron, con 13 casos; les siguieron 12 agentes novatos, 12 cabos segundos, 2 sargentos segundos, 2 subtenientes y 1 teniente coronel. Un informe presentado por la institución reveló que entre las posibles causas estarían el estrés laboral y la depresión, esta última a consecuencia de problemas en el hogar y consumo de licor. En todos los casos, se suicidaron con su arma

de dotación. Estos problemas que aquejan a los uniformados son tratados en el plan integral 'Tú puedes, tú debes', que tiene como fin erradicar la violencia intrafamiliar y solucionar casos de alcoholismo, depresión y demás, aseguró la coronela Verónica Espinosa, directora de Bienestar Social de la Policía Nacional. Los especialistas visitan los domicilios de los gendarmes para conocer el nivel social y económico, hacer diagnósticos y con esa base iniciar los tratamientos, informó Espinosa. A inicios de septiembre de 2014, el general Fabián Solano comunicó que la Inspección General de la Policía Nacional, mediante el Centro de Análisis de la Conducta Policial, pretende un cambio estructural, cultural y social de sus miembros, para mejorar la productividad y condiciones de vida en su entorno íntimo y familiar. *Diario El Telégrafo. 13/09/2014.*

La Policía Nacional apunta a ser más civil.

En la despedida del comandante Rodrigo Suárez, se habló de que "ha finalizado una etapa de consolidación, cambios, esfuerzos y grandes resultados mediante el nuevo modelo de gestión comunitaria". En el 2012 ya se anunciaba la presentación de la nueva doctrina para la institución uniformada: "Orden, seguridad y protección de Derechos". *Diario El Comercio. 28/09/2014.*

Ministro del Interior anuncia la creación de una nueva unidad de la Policía Nacional para combatir microtráfico.

El Ministro del Interior, José Serrano, anunció la creación de una nueva unidad de la Policía Nacional que estará encaminada a localizar y desarticular a personas u organizaciones dedicadas al microtráfico de drogas en el país. Serrano explicó que esa dirección estaría lista para el mes de enero de 2015, para lo que se ultima detalles con el mando policial. Dijo que lo que se busca es generar un doble proceso: por un lado, un equipo de élite dedicado a los temas de tráfico de drogas a nivel internacional y, por otro, el equipo de microtráfico "que es fundamental tenerlo en las calles, en los colegios, en los barrios". Apuntó que se seguirá fortaleciendo a la Policía

y sus grupos de élites. También recordó que estará listo el Centro de Rehabilitación Social del Austro, en el cual se ubicarán de forma permanente 300 policías brindando seguridad hasta que los guías penitenciarios concluyan su etapa de formación y capacitación. *Diario El Telégrafo. 04/12/2014.*

Aeropolicial cuenta con 38 pilotos para operaciones de rescate.

Desde enero del 2014, personal del servicio Aeropolicial efectuó 101 rescates y evacuaciones aeromédicas, indicó el mayor Francisco Zumárraga, comandante de la unidad. "El servicio surge por la necesidad de contar con apoyo aéreo a las unidades policiales en tierra y se inauguró el 1 de diciembre de 1997, mediante decreto ejecutivo", señaló el oficial. Aeropolicial tiene 7 bases a nivel nacional, distribuidas en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo de los Tsáchilas, Portoviejo, Shell-Mera, y en Riobamba. Al momento, cuenta con 38 pilotos, 7 de ala fija (avión) y 31 de ala rotatoria (helicópteros). La flota es de 10 helicópteros y 3 aviones en las distintas operaciones emergentes. Aeropolicial efectúa actividades como: búsqueda, rescate y evacuación de personas; operaciones de traslado de recursos; apoyo a la Policía y a los organismos de socorro, entre otras. Cuando la central de emergencia emite una alerta, la aeronave debe estar en vuelo en un tiempo de 5 a 7 minutos. *Diario El Telégrafo. 12/11/2014.*

ECUADOR: RELACIONES INTERNACIONALES

Ecuador y China negocian sobre acuerdos de cooperación militar.

El 16 de septiembre de 2014 en una reunión en Pekín, la entonces Ministra de Defensa María Fernanda Espinosa y su homólogo chino, Chang Wanquan, manifestaron su voluntad de impulsar la cooperación militar entre ambos países. "China es el socio geoestratégico comercial y económico más importante que tiene en estos momentos Ecuador", señaló Espinosa, que recordó a los presentes la multitud de acuerdos de colaboración

entre ambas naciones en distintas materias. En defensa, explicó que existen cinco convenios activos con China, y un proyecto para fortalecer las capacidades y la formación del personal militar ecuatoriano en ese país. Instructores de artes marciales y profesores del idioma enseñarán en la universidad de las Fuerzas Armadas. El convenio, suscrito en la ciudad de Quito por la ministra ecuatoriana y el embajador chino en Ecuador, Wang Shi Xiong, supone la entrega de 4,8 millones de dólares por parte de China, que será empleado por Ecuador en la inversión de indumentaria necesaria para las unidades de la defensa nacional. *Diario El Comercio*. 16/09/2014.

Secretaría adjunta de Estado de los EEUU, se reúne con el Canciller ecuatoriano Ricardo Patiño. Las autoridades ecuatorianas, y el Canciller Ricardo Patiño, recibieron en la Cancillería a la secretaria de estado adjunta Roberta Jacobson, para los Asuntos del Hemisferio Occidental, y al embajador Adam Namm. La relación bilateral entre los gobiernos ha tenido altibajos durante el gobierno del Presidente Rafael Correa, especialmente desde 2008 con el bombardeo de Angostura. El Canciller Patiño afirmó, que se trataría ese tema para aclarar la presunta participación de la CIA en el ataque al campamento de las FARC, ubicado en la frontera ecuatoriana. Según un comunicado de la Embajada, el objetivo del encuentro era reforzar la cooperación bilateral en temas de interés común: educación, comercio, seguridad, patrimonio cultural y energía limpia. *Diario El Comercio*. 05/11/2014.

FUERZAS ARMADAS EN SEGURIDAD CIUDADANA

La Armada enfrenta 5 factores de riesgo en un área de 1'300.000 km². La Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea) considera 5 delitos como riesgosos para el país: el contrabando de mercadería y de combustibles, robos a embarcaciones, narcotráfico y migración

ilegal. El capitán Jorge Durán, director de Operaciones Marítimas de la Dirnea, explicó que el principal objetivo de la institución es precautelar la vida humana en la zona marítima. Para lograrlo deben custodiar 1'300.000 km² de espacio acuático (5 veces más que la zona terrestre del país). La Armada del Ecuador puso en marcha, desde septiembre de 2013, el Plan de Seguridad Integral de los Espacios Acuáticos, enfocado en el bienestar del individuo y del Estado. Actualmente, los espacios acuáticos están divididos en la zonas norte (frontera con Colombia), centro del Ecuador y sur (frontera con Perú) para un mejor resguardo. *Diario El Telégrafo*. 02/10/2014.

Armamento militar y policial ecuatoriano se recuperó en Colombia.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador recuperan un fusil HK calibre 5.56 mm perteneciente al Ejército ecuatoriano y cinco pistolas Glock calibre 9 mm con tres alimentadoras de la Policía Nacional. Las armas de dotación oficial fueron entregadas el 16 de octubre de 2014, en el Batallón de Infantería Mayor Galo Molina de Tulcán, en la provincia de Carchi en Ecuador, por la Fiscalía de Colombia. Según información proporcionada por el capitán Edmundo Mora, jefe del Centro de Control de Armas de las provincias de Carchi e Imbabura, el fusil habría sido recuperado por el Ejército colombiano en San Andrés de Tumaco, frente a Esmeraldas. El arma pertenece a la Fuerza Terrestre del Ecuador y fue hurtada del Batallón Imbabura de la provincia de El Oro, en el año 2005. La Dirección de Logística de la Fuerza Terrestre del Ecuador lleva adelante un proceso de recuperación de armas sustraídas de las unidades militares. Se presume que el armamento fue robado de las unidades militares y policiales, y luego comercializado a los grupos de subversivos de Colombia. *Diario El Comercio*. 16/10/2014.

Gobierno de Ecuador impulsa que FFAA apoyen combate interno a la delincuencia y busca "seguridad jurídica". El gobierno de Ecuador impulsa un proyecto de enmienda constitucional para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en el combate al crimen organizado, según informó el Ministro de Defensa, Fernando Cordero, quien identificó al crimen organizado implicado con el narcotráfico y los ciberataques como las nuevas amenazas que enfrenta Ecuador. Respaldó la enmienda constitucional que prevé que los militares "complementen" el trabajo de la policía en seguridad interna. La Constitución de 2008 asignó a las Fuerzas Armadas la "misión fundamental" de defensa de la soberanía y la integridad territorial. Ecuador cuenta con un aproximado de 42.000 militares y con 44.000 policías. Cordero consideró necesaria la enmienda constitucional para dotar de "seguridad jurídica" a las Fuerzas Armadas ante eventuales demandas. El proyecto de enmienda está próximo a iniciar su trámite en la Asamblea de mayoría oficialista, tras un fallo constitucional que autorizó su aprobación vía legislativa. *Diario El Comercio*. 13/11/2014.

Capacitación a militares en técnicas para el control interno complementariamente con la Policía.

El Ministro de Defensa, Fernando Cordero, y otros funcionarios presentaron en la Asamblea sus aportes a la enmienda constitucional relacionada con los militares para que los soldados colaboren en tareas internas en coordinación con los policías. La intervención de las FFAA ya se trata en la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Pública, aprobada en mayo de 2014 para que los militares, sin descuidar su misión fundamental de defensa externa, "intervendrán por disposición del Presidente de la República, en la protección interna, el mantenimiento y control del orden público y seguridad ciudadana". En el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se dijo que en las tareas de control in-

terno se usan pistolas nueve milímetros. Por ello, en la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Finanzas se advierte que el año pasado el Gobierno invirtió USD 7,14 millones en armamento para el Ejército. Y tras la aprobación de la Ley de Seguridad Pública ya se dieron los primeros operativos conjuntos entre militares y policías. *Diario El Comercio*. 21/11/2014.

PROTESTA SOCIAL

Human Rights Watch denuncia excesiva fuerza policial durante protestas ocurridas en septiembre de 2014 en Ecuador. La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció la excesiva fuerza aplicada por miembros de la Policía Nacional de Ecuador para dispersar manifestaciones mayormente pacíficas en la ciudad de Quito el 17 y 18 de septiembre de 2014, policías nacionales ecuatorianos "detuvieron arbitrariamente y golpearon a manifestantes". Entre las víctimas de abusos había numerosos manifestantes pacíficos y tran-

seúntes, criticó la organización. Más de cien detenidos fueron llevados ante un juez y procesados por delitos como "ataque o resistencia" a la autoridad y "daño a bien ajeno", según datos de HRW. Una minoría de los manifestantes estuvo involucrada en actos de violencia durante enfrentamientos con la policía, que dejaron un saldo de más de 30 oficiales heridos. Esta organización denunció que muchos detenidos no fueron informados de los cargos en su contra antes de las audiencias, no tuvieron acceso a sus abogados hasta media hora antes de las mismas, y solo pudieron consultar con sus abogados en presencia de policías o guardias penitenciarios. Human Rights Watch instó a las autoridades ecuatorianas a llevar a cabo "investigaciones exhaustivas e imparciales sobre la actuación represiva por parte de las fuerzas de seguridad y las denuncias de abusos y torturas contra manifestantes". En la mayor marcha opositora que se celebró en la ciudad de Quito, los manifestantes protestaban contra la propuesta de reformar el Código Laboral, el

posible incremento de los costos de transporte, el acceso a la educación en universidades públicas y contra las políticas gubernamentales de promoción de industrias extractivas, entre otras cuestiones. *Diario El Comercio*. 20/10/2014.



Comité Editorial:

- Bertha García Gallegos
- Francisco Rhon Dávila
- Juan Pablo Aguilar
- Marco Romero Cevallos

Asesoramiento Internacional:

- Dr. Gustavo Suárez Pertierra – UNED (España)
- Dr. Louis Goodman – American University (USA)
- Dra. Sonia Alda - Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado – España

Investigadores:

- Alejandro Montúfar Reinoso
- Emilia Banda Capello
- Susana Espinosa Soto
- Gustavo Duque Granados

Programa: Democracia, Seguridad y Defensa

Dirección: Av. 12 de Octubre y Patria. Universidad Católica. Torre 2, piso 9, oficina 901.

Teléfonos: (593-2) 299 1041 / (593-2) 299 1700 ext. 1474 / 1041

e-mail: bgarcia@puce.edu.ec

Correspondencia y solicitud de ejemplares: programa.dsd.puce@gmail.com